Universidad de Valladolid

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA

Grado en Administración y Dirección de Empresas

TRABAJO FIN DE GRADO

Presupuestos generales de las Comunidades Autónomas: impacto económico de las políticas sociales

Presentado por: Izan González Jiménez

Tutelado por: Juan Carlos Frechoso Remiro

Soria, junio de 2024

CET

FACULTAD de CIENCIAS EMPRESARIALES y del TRABAJO de SORIA

Resumen

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo analizar y comparar el impacto económico de los presupuestos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) en materia de políticas sociales. Se estudiará la evolución de la inversión en este ámbito durante el periodo 2013-2023, desagregando el gasto por áreas relativas a los conocidos como tres pilares del bienestar social: salud, educación y protección social.

Asimismo, se evaluará el impacto económico de las diferentes políticas sociales implementadas en cada región, utilizando indicadores económicos.

Por último, se identificarán las principales diferencias entre las CC. AA. en cuanto a la inversión en políticas sociales, tanto en términos de cantidad como de enfoque, y se explorarán las posibles causas de estas diferencias.

Palabras clave: presupuestos, políticas sociales, sanidad, educación, protección social, Comunidades Autónomas.

Índice

Bloque 1 1
Contextualización 1
Justificación 2
Objetivos 2
Hipótesis 3
Metodología 3
Estructura del documento 4
Bloque 2 4
Marco Teórico 4
Definición de presupuesto público y políticas sociales 4
Definición de presupuesto público. 5
Objetivos del presupuesto público. 5
Clasificación de los presupuestos públicos en España. 6
Definición de las políticas sociales. 7
Principios de las políticas sociales en España. 7
Ámbitos de intervención de las políticas sociales. 8
Clasificación de las políticas sociales en España 9
Impacto económico de las políticas sociales 11
Análisis de la inversión regional en políticas sociales 12
Sanidad 15
Educación 21
Protección social 25
Bloque 3 29
Conclusiones 29
Cumplimiento de las Hipótesis 29
Deducciones sobre los Objetivos Específicos 29
Conclusión sobre el Objetivo Principal 30
Limitaciones del Estudio 30
Líneas Futuras de Investigación 30
Bloque 4 31
Referencias bibliográficas 31

Bloque 1

Contextualización

El Estado del Bienestar surge como una respuesta a las necesidades sociales y económicas de la población en el siglo XX, consolidándose tras la Segunda Guerra Mundial. El término "Estado del Bienestar" se refiere a un modelo de gobierno en el que el Estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar social y económico de sus ciudadanos a través de políticas sociales específicas. Este modelo se vincula estrechamente con las políticas sociales, que incluyen la salud, la educación y la protección social (Titmuss, 1950; Marshall, 1950).

Las políticas sociales tienen como objetivo principal reducir las desigualdades sociales y proporcionar un nivel de vida adecuado a todos los ciudadanos. Estas políticas están diseñadas para ofrecer una red de seguridad y fomentar la equidad social. La implementación de estas políticas varía dependiendo de factores económicos y políticos. Por ejemplo, durante períodos de crisis económica, los gobiernos pueden verse obligados a recortar el gasto en políticas sociales debido a la disminución de ingresos fiscales y el aumento de la deuda pública. Por otro lado, los gobiernos de distinta ideología política pueden tener enfoques diferentes hacia el gasto social: mientras que los gobiernos de izquierda suelen favorecer un mayor gasto social para reducir las desigualdades, los gobiernos de derecha pueden priorizar la austeridad y la reducción del déficit.

La historia reciente de Europa ofrece numerosos ejemplos de cómo las políticas sociales se han visto afectadas por cambios económicos y políticos. Durante la crisis financiera de 2008, muchos países europeos implementaron medidas de austeridad que resultaron en recortes significativos en el gasto social. En contraste, en períodos de bonanza económica, es más probable que se aumente la inversión en políticas sociales para mejorar el bienestar de la población (Laparra & Pérez Eransus, 2012).

Al abordar diferentes políticas sociales en España a lo largo de este trabajo, es importante tener en cuenta el contexto en el que se han desarrollado las políticas sociales en España. Las políticas sociales en España han evolucionado significativamente a lo largo de las últimas décadas, influenciadas por cambios políticos, económicos y sociales. Desde la transición a la democracia en la década de 1970, España ha experimentado una expansión de su sistema de bienestar social, aunque con ciertas limitaciones en comparación con otros países europeos. La crisis económica de 2008 marcó un punto de inflexión, evidenciando la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población y la necesidad de fortalecer las redes de protección social. Este contexto histórico y social es fundamental para entender las prioridades, limitaciones y enfoques de las políticas sociales actuales en España.

También se debe tener en cuenta que los actores sociales juegan un papel crucial en la implementación y desarrollo de las políticas sociales. Entre estos actores se encuentran el gobierno y sus diferentes niveles administrativos (nacional, autonómico y local), los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG y los movimientos sociales. Cada actor aporta perspectivas y prioridades distintas, lo que suele dar lugar a un complejo proceso de negociación y compromiso. La colaboración y el conflicto entre estos actores influyen significativamente en la eficacia de las políticas sociales implementadas.

Justificación

Las políticas sociales son fundamentales para el bienestar de los individuos, especialmente aquellos con menores ingresos. Estas políticas proporcionan un apoyo esencial que incluye acceso a servicios de salud, educación de calidad y protección social, contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Un estudio detallado de los cambios en las políticas sociales es crucial debido a su gran impacto en la sociedad. Por ejemplo, un aumento en la inversión en salud puede mejorar significativamente la esperanza de vida y reducir las tasas de mortalidad, mientras que la inversión en educación puede aumentar las oportunidades de empleo y la movilidad social.

La evaluación de las políticas sociales es esencial para determinar su eficacia y eficiencia. En España, la evaluación de estas políticas ha ganado relevancia en los últimos años, aunque aún enfrenta desafíos significativos, como la falta de una cultura de evaluación arraigada y la necesidad de mejorar los mecanismos y herramientas de evaluación. La evaluación permite identificar no solo los logros, sino también las áreas de mejora, contribuyendo a una asignación más eficiente de los recursos públicos y a la adaptación de las políticas a las necesidades cambiantes de la sociedad. (Funcas, 2022)

Las políticas sociales en España enfrentan varios retos y desafíos. Entre ellos, el envejecimiento de la población, el incremento de la desigualdad, los cambios en las estructuras familiares y los desafíos derivados de la digitalización y la globalización. Estos retos requieren respuestas innovadoras y adaptativas por parte de las políticas sociales, que deben ser capaces de abordar tanto las necesidades inmediatas como las tendencias a largo plazo. Además, la sostenibilidad financiera del sistema de bienestar social es un desafío constante, especialmente en el contexto de las restricciones presupuestarias y las presiones económicas. (Real Instituto Elcano, 2024)

Por lo tanto, analizar cómo las variaciones en la financiación y el enfoque de las políticas sociales afectan estos resultados es vital para formular recomendaciones que mejoren la eficiencia y equidad de dichas políticas.

Además, un análisis comparativo entre las diferentes Comunidades Autónomas permite identificar mejores prácticas y estrategias efectivas que pueden ser replicadas en otras regiones. Este tipo de estudio no solo tiene implicaciones académicas, sino también prácticas, ya que puede influir en la toma de decisiones políticas y en la formulación de políticas públicas más efectivas y equitativas.

Objetivos

El objetivo general del trabajo es comparar el impacto económico de los presupuestos de las Comunidades Autónomas en materia de políticas sociales, describiendo las diferentes estrategias y prioridades regionales en España.

Respecto a los objetivos específicos, en primer lugar, se busca comparar la evolución de los presupuestos destinados a políticas sociales en cada Comunidad Autónoma durante el periodo 2010-2023.

Además, se pretende analizar la composición del gasto en políticas sociales dentro de cada Comunidad Autónoma, desagregando por áreas como educación, sanidad, entre otras.

También evaluar el impacto económico de las diferentes políticas sociales implementadas en cada región, utilizando indicadores como el PIB, la productividad por empleado o la tasa de desempleo.

Se busca identificar las principales diferencias entre las Comunidades Autónomas en cuanto a la inversión en políticas sociales, tanto en términos de cantidad como de enfoque.

Otro objetivo se basa en comprobar las posibles causas de estas diferencias, considerando factores como el contexto socioeconómico, la ideología política del gobierno regional o el sistema de financiación autonómica. Asimismo, realizar un análisis crítico de las políticas sociales en España, valorando su eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos de bienestar social.

Por otra parte, investigar el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas por las Comunidades Autónomas en materia de políticas sociales, así como el nivel de satisfacción y bienestar de la población beneficiaria de las mismas.

Finalmente, proponer recomendaciones y sugerencias para mejorar la eficiencia, la equidad y la calidad de las políticas sociales en las Comunidades Autónomas, basándose en los resultados del análisis y la comparación realizados.

Hipótesis

En primer lugar, se espera que exista una relación positiva entre la inversión en políticas sociales y el desarrollo económico y social de las CC. AA.

En segundo lugar, se espera que las CC. AA. con mayores niveles de renta per cápita destinen una mayor proporción de su presupuesto a políticas sociales.

Finalmente, se espera que las CC. AA. con gobiernos de izquierda tengan una mayor tendencia a implementar políticas sociales redistributivas.

Metodología

La metodología empleada en este trabajo se basa en un enfoque mixto, combinando tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo para comprender y comparar el impacto económico de los presupuestos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) en materia de políticas sociales durante el período 2013-2023.

En primer lugar, se realizó una extensa recopilación de datos presupuestarios provenientes de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Hacienda. Estos datos se obtuvieron de los portales oficiales de cada comunidad autónoma y de las bases de datos disponibles públicamente. Se recogieron y organizaron los presupuestos anuales de cada CC. AA., prestando especial atención a las partidas destinadas a políticas sociales.

Para desagregar el gasto en políticas sociales, se clasificaron las partidas presupuestarias en las áreas de salud, educación y protección social, conocidas como los tres pilares del bienestar social. Esta clasificación permitió una evaluación detallada de la inversión en cada ámbito y facilitó la comparación entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Se emplearon técnicas estadísticas para analizar la relación entre la inversión en políticas sociales y el desarrollo económico y social de las CC. AA. Este análisis incluyó la utilización de indicadores económicos como el PIB per cápita o el índice de Gini. Se

buscó establecer correlaciones entre estos indicadores y el nivel de inversión en políticas sociales para identificar posibles tendencias y patrones.

La metodología también incluyó una revisión exhaustiva de la literatura académica y estudios previos sobre el impacto económico de las políticas sociales. Esta revisión permitió contextualizar los datos y resultados obtenidos, situándolos dentro del marco teórico existente y aportando una base sólida para la interpretación de los hallazgos.

Estructura del documento

El primer bloque del trabajo incluye la introducción, donde se desarrolla la contextualización de este, se ofrece una justificación del estudio y se presentan los objetivos y las hipótesis de la investigación. Esta sección establece el marco inicial que guía todo el análisis, explicando la importancia de evaluar el impacto económico de las políticas sociales en las CC. AA. y la relevancia de realizar un análisis comparativo.

El segundo apartado se dedica al marco teórico, donde se revisa la literatura especializada sobre el impacto económico de las políticas sociales. Aquí se definen conceptos clave como el presupuesto público y las políticas sociales, y se examinan los principios y objetivos de estas políticas en el contexto español. Esta revisión tiene el propósito de fundamentar teóricamente el análisis empírico posterior y proporcionar un marco conceptual sólido para la interpretación de los resultados.

La parte práctica del documento es el núcleo del análisis empírico. En esta sección, se compara la inversión en políticas sociales entre las diferentes CC. AA. Se evalúa el impacto económico de estas políticas utilizando diversos indicadores económicos y sociales, y se identifican las principales diferencias entre las comunidades en términos de cantidad y enfoque de la inversión. También se exploran las posibles causas de estas diferencias, considerando factores como el contexto socioeconómico, la ideología política del gobierno regional y el sistema de financiación autonómica.

Finalmente, el trabajo concluye con una sección de conclusiones donde se resumen los resultados obtenidos y se discuten sus implicaciones. En esta parte, se realiza una valoración crítica de las políticas sociales en España, se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por las CC. AA. y se proponen recomendaciones para mejorar la eficiencia, la equidad y la calidad de las políticas sociales. Además, se identifican las limitaciones del estudio y se sugieren líneas futuras de investigación para profundizar en el análisis de este importante tema.

El documento culmina con una sección de referencias bibliográficas, que incluye un listado detallado de todas las fuentes consultadas a lo largo del trabajo, asegurando la transparencia y la solidez académica de la investigación.

Bloque 2

Marco Teórico

Definición de presupuesto público y políticas sociales

Burkhead (1966) define la palabra "presupuesto" como la bolsa donde se depositaban las rentas públicas para cubrir los gastos del Estado. Con el tiempo, el término "presupuesto" comenzó a referirse a los documentos que contenía el saco, es decir, los planes financieros del gobierno que se presentaban a la legislatura para su aprobación.

Para realizar sus funciones, el Estado necesita realizar gastos y obtener recursos. Esto implica manejar grandes sumas de dinero que deben ser calculadas y autorizadas de antemano.

En los Estados modernos, la actividad financiera se planifica de forma precisa. El conjunto de gastos y recursos se prevé por adelantado, generalmente para un período de un año, en un cuadro detallado de carácter obligatorio. En principio, ningún gasto puede ser realizado ni ningún ingreso percibido si no se encuentran incluidos en el plan (Amado, 2024).

Definición de presupuesto público.

El presupuesto público es un documento fundamental que refleja las prioridades del gobierno en términos de ingresos y gastos. Este documento es elaborado y aprobado por el Estado, y tiene como propósito principal planificar y controlar las finanzas públicas. En primer lugar, es necesario entender que el Estado desempeña un papel crucial en la gestión de los recursos económicos, ya que es responsable de la recaudación de ingresos a través de impuestos y otras fuentes, así como de la asignación de estos recursos a diversos sectores y servicios públicos.

De acuerdo con esto, se puede definir el presupuesto público como un acto de gobierno mediante el cual se planifican y se autorizan los ingresos y los gastos del sector público para un período determinado, generalmente un año. Este presupuesto no solo establece las previsiones de ingresos y las autorizaciones de gasto, sino también actúa como una herramienta de política económica y social, orientando los recursos hacia las áreas prioritarias según las necesidades y objetivos del gobierno.

El presupuesto público, por tanto, refleja las decisiones del gobierno en cuanto a la distribución de los recursos y las prioridades de gasto, y es un instrumento clave para la implementación de políticas públicas. A través de este documento, el Estado busca garantizar la estabilidad económica, promover el desarrollo social y económico, y asegurar la prestación eficiente de servicios públicos esenciales (Erviti, 2021).

Para poder desempeñar correctamente este papel, el presupuesto debería: enumerar los gastos a realizar, desglosar las actividades, definir las políticas y explicitar los objetivos (Amado, 2024).

Objetivos del presupuesto público.

Los objetivos de un presupuesto público son diversos y se centran en la gestión eficiente de los recursos del Estado para alcanzar resultados que beneficien a la población. A continuación, se detallan los objetivos principales (MPFN, 2015).

El presupuesto público desempeña un papel crucial en la administración de los recursos del Estado, orientando su gestión hacia la consecución de beneficios tangibles para la sociedad. Este instrumento de gestión estatal no solo se enfoca en la eficaz asignación y utilización de los fondos públicos, sino que también abarca una serie de objetivos fundamentales que buscan mejorar la calidad de vida de la población y asegurar un desarrollo sostenible y equitativo.

Uno de los propósitos primordiales del presupuesto público es la gestión orientada a resultados. Esto implica que el Estado, a través de sus diversas entidades, se compromete a alcanzar metas específicas que favorezcan a la ciudadanía, garantizando la prestación

de servicios de calidad con equidad, eficacia y eficiencia. Este enfoque resulta esencial para satisfacer las necesidades de la sociedad de manera efectiva y justa.

El equilibrio fiscal representa otro objetivo vital, estableciendo límites claros de gasto para las entidades del sector público durante el año fiscal, en concordancia con los ingresos disponibles. Este principio asegura una gestión fiscal responsable que mantiene la estabilidad económica y previene desequilibrios que podrían afectar negativamente al país.

En el ámbito laboral, el presupuesto público juega un papel importante en el fomento de la ocupación. Mediante políticas financieras estratégicas, el Estado busca influir positivamente en el mercado laboral para incrementar la tasa de empleo y avanzar hacia el objetivo de alcanzar la plena ocupación, contribuyendo así al bienestar económico y social de la población.

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en el proceso presupuestario. El presupuesto debe ser un documento abierto y accesible que permita a los ciudadanos y a entidades externas comprender cómo se están utilizando los recursos estatales, fomentando así la confianza y la participación ciudadana en la gestión pública.

La asignación eficiente de recursos es esencial para garantizar que estos se destinen a las áreas de mayor prioridad y necesidad dentro de la acción gubernamental. Este enfoque busca maximizar los beneficios sociales, asegurando que cada peso gastado contribuya significativamente al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos es otro objetivo clave. Integrando herramientas de control de gestión con el presupuesto, el Estado se esfuerza por optimizar la utilización de los fondos disponibles, minimizando el desperdicio y mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

La participación ciudadana en el proceso presupuestario es fundamental para asegurar que las decisiones de gasto reflejen las necesidades y prioridades de la población. Facilitar el acceso a la información y fomentar un diálogo abierto entre el gobierno y los ciudadanos contribuye a una gestión más inclusiva y democrática de los recursos estatales.

Finalmente, el presupuesto público sirve como una herramienta de planificación a largo plazo, permitiendo al Estado establecer prioridades claras, identificar desafíos y oportunidades, y tomar decisiones estratégicas informadas que guiarán el desarrollo futuro del país. Este enfoque prospectivo es esencial para asegurar un crecimiento sostenible y equitativo que beneficie a todas las capas de la sociedad. (IPAPPG, 2022)

Clasificación de los presupuestos públicos en España.

En España, los presupuestos públicos se clasifican de tres maneras principales: orgánica, por funciones y por programas o proyectos.

La clasificación orgánica se basa en la estructura del sector público. En primer lugar, se encuentra la Administración General del Estado, que incluye ministerios, organismos autónomos y otras entidades dependientes del Estado. En segundo lugar, la Seguridad Social comprende las entidades gestoras y los servicios comunes de este sistema. A continuación, están las Comunidades Autónomas, las cuales tienen autonomía financiera para aprobar sus propios presupuestos anuales, que deben cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria y abarcar la totalidad de los gastos e ingresos, según lo

establece la Ley Orgánica 8/1980. Por último, las entidades locales, como ayuntamientos, diputaciones provinciales y cabildos insulares, también forman parte de esta clasificación.

La clasificación por funciones organiza los gastos e ingresos de acuerdo con los objetivos que se persiguen. Entre estos objetivos se incluyen los servicios públicos básicos, tales como la educación, la sanidad, la defensa y la justicia. Otro objetivo es la protección social, que abarca la Seguridad Social, el desempleo y las pensiones. Asimismo, se considera la promoción económica, la cual engloba sectores como la agricultura, la industria y el turismo. Finalmente, se encuentra la deuda pública, que corresponde a los gastos destinados al pago de intereses y amortizaciones de la deuda.

La clasificación por programas o proyectos se centra en las actividades y metas específicas que se pretenden alcanzar con los recursos públicos. Dentro de esta clasificación, los programas constituyen un conjunto de actuaciones orientadas hacia un objetivo general. Por su parte, los proyectos son las acciones concretas que se desarrollan dentro de un programa. Por ejemplo, en el programa "Educación" se podrían incluir proyectos como la construcción de nuevos colegios, la mejora de las infraestructuras educativas y la concesión de becas para estudiantes.

Las tres clasificaciones son complementarias y permiten analizar los presupuestos públicos desde diferentes perspectivas. La clasificación orgánica permite conocer la estructura del sector público, la clasificación por funciones permite conocer los objetivos que se persiguen con los recursos públicos y la clasificación por programas o proyectos permite conocer las actividades concretas que se van a realizar (Ministerio de Hacienda, 2022). De esta manera, la clasificación de los presupuestos públicos en España permite una organización detallada y eficiente de los recursos, facilitando la gestión y el control de estos para cumplir con los objetivos establecidos en cada ámbito.

Definición de las políticas sociales.

Las políticas sociales representan un conjunto articulado de estrategias, programas y medidas que el Estado, en colaboración con otros actores de la sociedad, despliega con el fin de asegurar el bienestar general de la población. Estas políticas son fundamentales para atender las necesidades básicas de los ciudadanos, promover la equidad y la justicia social, y ofrecer protección a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Su objetivo es construir un marco de convivencia que garantice la dignidad y el desarrollo integral de todas las personas. (Estivill, Breuer, Engels, & Vranken, 2004)

Las Comunidades Autónomas no solo colaboran con el Estado en la implementación de políticas sociales, sino que también tienen la responsabilidad de crear y adaptar sus propias políticas para atender las necesidades específicas de sus poblaciones. Esto refleja un modelo de gobernanza multinivel en el que diferentes niveles de gobierno y actores de la sociedad trabajan conjuntamente para asegurar el bienestar general de la población.

Principios de las políticas sociales en España.

Las políticas sociales en España se fundamentan en una serie de principios éticos y morales que guían su diseño e implementación, con el objetivo de promover el bienestar colectivo y asegurar un desarrollo equitativo y sostenible de la sociedad. Estos principios no solo reflejan los valores fundamentales sobre los que se construye el Estado de bienestar, sino que también establecen un marco para la acción gubernamental en el ámbito social.

Uno de los pilares sobre los que se asientan estas políticas es el principio de universalidad. Este principio sostiene que todos los ciudadanos, sin excepción, deben tener acceso a los servicios y beneficios que el Estado provee para mejorar la calidad de vida y el bienestar general. La universalidad es una declaración de inclusión, asegurando que nadie quede excluido de la protección social por razones económicas, sociales o laborales. Este enfoque refleja el compromiso del Estado con el bienestar de todos sus ciudadanos, reconociendo la importancia de garantizar un mínimo de seguridad y apoyo a cada individuo.

La igualdad es otro pilar fundamental de las políticas sociales, enfatizando la necesidad de ofrecer a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para desarrollarse y prosperar. Este principio va más allá de la mera no discriminación; busca activamente eliminar las barreras que impiden que las personas accedan en igualdad de condiciones a los recursos y oportunidades disponibles. La igualdad es esencial para construir una sociedad justa donde todos puedan alcanzar su máximo potencial, independientemente de su origen, condición o circunstancias personales.

Finalmente, la solidaridad se erige como un principio clave, reflejando el compromiso colectivo del Estado y la sociedad hacia los grupos más vulnerables. Este principio se traduce en un apoyo tangible a aquellos que se encuentran en situaciones de desventaja, fomentando la cohesión social y el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. La solidaridad es la expresión de un entendimiento profundo de que el bienestar de cada individuo está intrínsecamente ligado al bienestar de la sociedad en su conjunto, y que el apoyo a los más necesitados fortalece a la comunidad en su totalidad.

Estos principios de universalidad, igualdad y solidaridad no solo guían la formulación e implementación de las políticas sociales en España, sino que también reflejan un compromiso ético con la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. A través de estos valores, el Estado busca no solo atender las necesidades inmediatas de sus ciudadanos, sino también promover un desarrollo social sostenible que beneficie a las generaciones futuras. (Fernández García & de la Fuente Robles, 2009)

Ámbitos de intervención de las políticas sociales.

Estas políticas se articulan en torno a áreas clave que abordan las necesidades básicas y los desafíos específicos que enfrentan los individuos y las comunidades en diferentes etapas de la vida y contextos socioeconómicos. A continuación, se presenta una exploración de los principales ámbitos de intervención de las políticas sociales, destacando su importancia y objetivos. (Tezanos, 2008)

Educación: La educación es un derecho humano reconocido y un pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Se entiende por educación el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite a las personas adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para su desarrollo personal y social. Las políticas educativas buscan garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, contribuyendo así al progreso de la sociedad.

Sanidad: La sanidad, o salud pública, se refiere al conjunto de servicios y acciones que tienen como objetivo proteger, promover y restaurar la salud de la población. Las políticas sanitarias incluyen la prevención de enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, así como la promoción de estilos de vida saludables. El fin último es proporcionar servicios

de salud accesibles y de calidad para toda la población, asegurando el bienestar físico, mental y social de los individuos.

Protección Social: La protección social engloba programas y medidas que ofrecen asistencia económica y apoyo a individuos y familias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza, el desempleo, la enfermedad, la discapacidad y la vejez. Estos programas buscan asegurar un nivel mínimo de ingresos y acceso a servicios básicos, promoviendo la seguridad económica y social y la resiliencia frente a crisis y adversidades.

Vivienda: Las políticas de vivienda se centran en asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno y adecuado. Esto implica la implementación de programas de vivienda asequible, el desarrollo de infraestructuras habitacionales y la regulación del mercado inmobiliario para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios, y para prevenir la especulación y el desplazamiento forzado.

Empleo: El empleo es esencial para la dignidad humana y el desarrollo económico. Las políticas de empleo se enfocan en la creación de puestos de trabajo dignos y sostenibles, la formación profesional y la inserción laboral, con especial atención a jóvenes, mujeres y otros grupos en riesgo de exclusión laboral. Estas políticas buscan mejorar la calidad del empleo y fomentar un mercado laboral inclusivo y equitativo.

Igualdad de Género: La igualdad de género es un objetivo transversal en todas las políticas sociales. Se refiere a la eliminación de todas las formas de discriminación basadas en el género, asegurando la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Las políticas en este ámbito buscan cerrar la brecha de género y empoderar a las mujeres y niñas.

Discapacidad: Las políticas dirigidas a personas con discapacidad tienen como objetivo garantizar su plena integración y participación en la sociedad. Esto incluye el acceso a servicios especializados, la promoción de la accesibilidad en todos los entornos, y la lucha contra la discriminación y el estigma. Se busca asegurar la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Infancia y Familia: La protección de la infancia y el apoyo a las familias son esenciales para el desarrollo social. Las políticas en este ámbito buscan asegurar el bienestar y los derechos de los niños y niñas, así como apoyar a las familias en su rol educativo y de cuidado. Estas políticas incluyen programas de apoyo parental, protección contra el abuso y la negligencia, y promoción de entornos familiares estables y seguros.

Si bien estos ámbitos cubren una amplia gama de intervenciones esenciales, es importante reconocer que las políticas sociales son dinámicas y deben adaptarse a los cambios socioculturales y económicos. Por lo tanto, pueden surgir nuevos ámbitos de intervención o evolucionar los existentes para responder a las necesidades emergentes de la sociedad.

Clasificación de las políticas sociales en España

En España, las políticas sociales se clasifican de diversas maneras según distintos criterios.

Según su finalidad, las políticas sociales se dividen en políticas de promoción social y políticas de protección social. Las políticas de promoción social tienen como objetivo mejorar integralmente las condiciones de vida de la población en su conjunto. Se centran en fomentar el desarrollo humano y social mediante medidas y programas en áreas clave

como la educación, que asegura el acceso a conocimientos y habilidades fundamentales; la sanidad, que garantiza servicios de salud de calidad; y la vivienda, que promueve el acceso a un hogar seguro y adecuado. Estas políticas buscan potenciar las capacidades de los individuos y comunidades, promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación activa en la sociedad.

Por otro lado, las políticas de protección social están dirigidas a brindar apoyo y protección a individuos y grupos en situaciones de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social. Incluyen programas de asistencia social que ofrecen apoyo material y servicios a quienes lo necesitan, pensiones que proporcionan ingresos a personas mayores, discapacitadas o a familias en caso de pérdida del proveedor, y subsidios que ayudan a cubrir necesidades básicas. El objetivo es asegurar un nivel mínimo de bienestar y seguridad para todos, especialmente para aquellos que no pueden proveerse por sí mismos (Guía de Evaluación de Políticas Sociales, 2019).

Según su ámbito de aplicación, distinguimos entre políticas sociales generales y específicas. Las políticas sociales generales están diseñadas para beneficiar a toda la población sin distinción de características individuales o grupales. Su propósito es construir y mantener una base de bienestar común, promoviendo servicios y beneficios accesibles para todos los ciudadanos, como la educación pública, la sanidad universal y la seguridad ciudadana. Representan el compromiso del Estado con el bienestar general de la sociedad.

En contraste, las políticas sociales específicas se centran en grupos poblacionales que requieren atención especializada debido a sus particulares condiciones o necesidades. Estos grupos incluyen personas mayores, personas con discapacidad, familias, niños y adolescentes, entre otros. Las políticas sociales específicas buscan abordar las necesidades únicas de estos grupos, proporcionando servicios y programas adaptados que promuevan su inclusión social, protección y desarrollo (Alemán Bracho, 2013).

Según su nivel de intervención, se distingue entre políticas sociales universales y selectivas. Las políticas sociales universales se ofrecen a toda la población, independientemente de su situación económica, social o cualquier otra condición, con el objetivo de garantizar el acceso a ciertos derechos básicos y servicios esenciales, como la educación y la salud, promoviendo la equidad y la cohesión social.

Por su parte, las políticas sociales selectivas están dirigidas a segmentos específicos de la población que cumplen con ciertos criterios o condiciones, como nivel de ingresos o situación de vulnerabilidad. Su propósito es focalizar recursos y esfuerzos en aquellos que más lo necesitan, buscando una distribución más eficiente de los recursos y una intervención más efectiva en la reducción de desigualdades (Alemán Bracho, 2013).

Según sus áreas de actuación y objetivos principales, las políticas sociales se pueden clasificar en varias categorías. En el ámbito de la educación, se busca garantizar el acceso universal, mejorar la calidad de la enseñanza y promover la equidad educativa, abarcando desde la educación infantil hasta la educación superior, pasando por la formación profesional y la educación para adultos. En sanidad, el enfoque está en asegurar el acceso a servicios de salud de calidad, promover la salud pública y prevenir enfermedades, incluyendo atención primaria, especializada, urgencias, salud mental y salud pública.

La protección social y la lucha contra la pobreza abarcan políticas diseñadas para proteger a los ciudadanos frente a situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza, la exclusión social o la dependencia, e incluyen el ingreso mínimo vital, ayudas a la vivienda y

programas de inclusión social. En el ámbito del empleo y las políticas activas de empleo, el objetivo es fomentar la creación de empleo, mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de colectivos vulnerables, mediante formación, incentivos a la contratación y programas de orientación laboral.

Las políticas de familia e infancia están destinadas a apoyar a las familias y proteger los derechos de los niños y adolescentes, incluyendo ayudas a familias numerosas, protección de la infancia y programas de conciliación de la vida laboral y familiar. En vivienda y urbanismo, las políticas buscan facilitar el acceso a una vivienda digna y promover el desarrollo urbano sostenible, mediante políticas de vivienda social, ayudas al alquiler y programas de regeneración urbana.

Finalmente, las políticas de justicia social y derechos están orientadas a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, luchando contra la discriminación y promoviendo la justicia social. Incluyen políticas de igualdad de género, lucha contra el racismo y la xenofobia, y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Impacto económico de las políticas sociales

Las políticas sociales en España, como en muchos otros países, son un conjunto de medidas gubernamentales diseñadas para mejorar el bienestar de la población, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Estas políticas abarcan áreas como la salud, la educación, la protección social, y la inclusión laboral y social. El impacto económico de estas políticas es multifacético y puede ser analizado desde distintas perspectivas. (Palma *et al.,* 2013)

Un primer enfoque se relaciona con la inversión en capital humano que estas políticas representan. Esta inversión supone un motor clave para el crecimiento económico a largo plazo (Arrow *et al*., 1995). La educación y la salud, por ejemplo, mejoran la productividad de la fuerza laboral y potencian la innovación y la competitividad económica. En este sentido, los presupuestos destinados a la educación y la sanidad no solo tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también contribuyen al desarrollo económico.

Podemos observar otro estímulo económico a través del efecto multiplicador del gasto social (Samuelson & Nordhaus, 2009). Al invertir en servicios sociales, el gobierno genera empleo y demanda en sectores relacionados, como la construcción (en el caso de infraestructuras sanitarias y educativas) o en el sector de la tecnología de la información (en el caso de la digitalización de servicios públicos). Además, al proporcionar redes de seguridad, las políticas sociales pueden estabilizar el consumo de las familias durante períodos de recesión económica, mitigando así los efectos de los ciclos económicos adversos (Morcillo & Beker, 2012).

Por otra parte, las políticas sociales desempeñan un papel crucial en la reducción de la desigualdad y la pobreza, lo que a su vez puede tener efectos positivos en la economía. Al reducir la desigualdad, se mejora la cohesión social y se crea un entorno más estable para la inversión y el crecimiento económico. Además, al reducir la pobreza, se amplía la base de consumidores y se fomenta un crecimiento económico más inclusivo. (Morcillo-Martínez, 2022)

El impacto económico de las políticas sociales también debe considerarse en términos de sostenibilidad fiscal. Un gasto social excesivo o mal gestionado puede llevar a déficits

presupuestarios y aumentar la deuda pública, lo que a largo plazo puede tener efectos negativos en la economía, como la reducción de la inversión pública en otras áreas críticas o el aumento de los impuestos. Por lo tanto, es crucial que las políticas sociales se diseñen y ejecuten de manera eficiente y sostenible.

La descentralización de las políticas sociales, con la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, ha permitido una mayor adaptación de las políticas a las necesidades locales y regionales. Sin embargo, esto también ha llevado a diferencias en la calidad y cantidad de servicios sociales entre regiones, lo que puede tener implicaciones para la equidad y la cohesión territorial en España. La coordinación y el equilibrio entre las políticas nacionales y regionales son esenciales para maximizar el impacto económico positivo de las políticas sociales. (Herrero Sánchez & Carrasco Pérez, 2010)

Finalmente, cabe mencionar que las políticas sociales enfrentan el reto de adaptarse a los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, y a las nuevas realidades económicas, como la digitalización y la globalización. La capacidad de las políticas sociales para responder a estos desafíos determinará su impacto económico futuro.

En conclusión, las políticas sociales en España tienen un impacto económico significativo que va más allá de su objetivo inmediato de mejorar el bienestar social. A través de la inversión en capital humano, el efecto multiplicador, la reducción de la desigualdad y la pobreza, y la sostenibilidad fiscal, estas políticas contribuyen al crecimiento económico y a la estabilidad macroeconómica. La descentralización de la gestión de las políticas sociales presenta tanto oportunidades como desafíos, y requiere un enfoque equilibrado para garantizar la equidad y la eficiencia en todo el territorio nacional.

Análisis de la inversión regional en políticas sociales

Este trabajo se propone como finalidad principal analizar y comparar el impacto económico de los presupuestos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) en materia de políticas sociales, con el objetivo de describir las diferentes estrategias y prioridades regionales en España. Este análisis es fundamental para comprender cómo se distribuyen y utilizan los recursos económicos en áreas clave para el bienestar social.

La necesidad de este análisis surge de la importancia de las políticas sociales en la promoción de la equidad, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población. Las CC. AA. en España tienen competencias transferidas en muchas de estas áreas, lo que resulta en una diversidad de enfoques y niveles de inversión. Por tanto, el objetivo de este TFG requiere un examen detallado de los presupuestos autonómicos para identificar cómo se asignan los recursos a las políticas sociales y cuál es el impacto económico y social concreto de estas inversiones.

Por ello, en esta parte del estudio, se realiza un examen detallado de los presupuestos generales de diversas CC. AA. españolas. La selección de las Comunidades Autónomas para este estudio se basa en criterios específicos que buscan maximizar la relevancia y representatividad de los datos analizados. Se han elegido Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco debido a su significativa contribución al producto interior bruto (PIB) nacional, lo que implica que las decisiones presupuestarias tomadas en estas comunidades tienen un impacto considerable en la economía española en su conjunto. Además, se incluye Navarra por su alto gasto per cápita en políticas sociales, lo que proporciona un contraste interesante en términos de

inversión por habitante. Finalmente, se selecciona Castilla y León para representar a las regiones del interior de España, ofreciendo una perspectiva sobre cómo las políticas sociales se gestionan en áreas menos metropolitanas.

Esta selección estratégica permite un análisis comprensivo y diverso, cubriendo tanto comunidades con grandes economías como aquellas con particularidades en su gestión de políticas sociales, lo que enriquece el estudio y proporciona una visión más completa del panorama de las políticas sociales en España.

La investigación avanza con un análisis empírico que contrasta la inversión en políticas sociales entre las CC. AA., con el objetivo de evaluar el impacto económico de estas políticas y discernir las variaciones interregionales. Para ello, se desglosa el gasto en áreas clave como sanidad, educación, servicios sociales, promoción social y fomento del empleo. Estas áreas se seleccionan por representar los mayores volúmenes de inversión en políticas sociales o por su impacto económico significativo, especialmente en lo que respecta al fomento del empleo. La elección de estas áreas se fundamenta en su capacidad para actuar como motores de cambio social y económico. La sanidad y la educación, por ejemplo, no solo representan los pilares básicos del bienestar social, sino que también son sectores que generan empleo y tienen un efecto multiplicador en la economía. Los servicios sociales y la promoción social son esenciales para la cohesión social y la prevención de situaciones de vulnerabilidad, mientras que el fomento del empleo es crucial para el desarrollo económico y la reducción de la desigualdad.

Finalmente, se identifican y analizan las principales diferencias en la inversión en políticas sociales entre las Comunidades Autónomas, tanto en términos cuantitativos como en los enfoques adoptados. Este análisis busca explorar las posibles causas subyacentes a estas diferencias, proporcionando una comprensión más profunda de cómo las políticas sociales influyen en el tejido económico de las regiones analizadas.

La siguiente tabla proporciona una visión comparativa de los gastos, gastos per cápita y el partido político gobernante en cada comunidad autónoma para el año 2022.

En el análisis de los presupuestos autonómicos de España, se observa que Cataluña y la Comunidad de Madrid, dos de las regiones con mayor relevancia económica en el país, presentan presupuestos significativamente elevados. No obstante, es notable que la Comunidad de Madrid registra un gasto per cápita relativamente bajo, específicamente de 3 796 euros, el más bajo entre todas las Comunidades Autónomas. Este fenómeno puede atribuirse a su alta densidad poblacional, que alcanza los 872 habitantes por kilómetro cuadrado (Ayuntamiento de Madrid, s.f.).

Además, dentro del grupo de comunidades con presupuestos altos, se incluyen aquellas con grandes poblaciones, como Andalucía y la Comunidad Valenciana. Por otro lado, la Comunidad Foral de Navarra, con una población de 678 103 habitantes, que resulta reducida en comparación con el resto, destaca por tener el gasto per cápita más alto del país, superando considerablemente al de otras comunidades (INE, s.f.).

En contraste, Castilla y León, que cuenta con una de las menores densidades poblacionales del país, aproximadamente 25 habitantes por kilómetro cuadrado, muestra un presupuesto per cápita reducido. Este caso contrasta marcadamente con el de la

Comunidad de Madrid, evidenciando la diversidad en la distribución del gasto público entre las Comunidades Autónomas (INE, s. f.).

Tabla 1

*Gastos de las CC. AA. 2022**

Comunidad Autónoma	**Gastos** (miles de €)	**Gastos per capita** (€)	**Partido**
Andalucía	36.074.925	4.207	PP
Aragón	6.991.666	5.182	PSOE
Asturias	5.289.634	5.257	PSOE
Cantabria	3.342.637	5.682	PRC
Castilla y León	11.533.775	4.843	PP
Castilla-La Mancha	11.385.020	5.473	PSOE
Canarias	9.973.597	4.509	PSOE
Cataluña	44.573.733	5.645	ERC
Extremadura	6.381.008	6.053	PSOE
Galicia	13.107.581	4.856	PP
Islas Baleares	6.397.822	5.299	PSOE
Región de Murcia	6.962.802	4.486	PP
Comunidad de Madrid	25.999.172	3.796	PP
Navarra	5.273.127	7.849	PSN-PSOE
País Vasco	13.140.577	5.922	EAJ-PNV
La Rioja	1.939.235	6.017	PSOE
Comunidad Valenciana	28.468.015	5.458	PSOE

Fuente: Ministerio de Hacienda (2023)

Como se puede comprobar en la tabla, en el panorama político español, el liderazgo de las Comunidades Autónomas suele estar dominado por dos grandes partidos: el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Estos partidos han alternado el poder en diversas regiones del país, reflejando un bipartidismo en la gestión autonómica. No obstante, existen notables excepciones que rompen con esta dinámica bipartidista y que son representativas de la diversidad política y del sistema de partidos en España.

Cataluña es una de estas excepciones donde el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha cobrado un papel protagonista en la política regional. ERC, un partido de orientación independentista y de izquierda, ha sido una fuerza política significativa en Cataluña, participando en coaliciones de gobierno y liderando iniciativas legislativas en el Parlament de Catalunya (*Esquerra Republicana de Catalunya*, s. f.).

En el País Vasco el liderazgo político recae en el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), que se distingue por su ideología nacionalista vasca y su postura moderada en el espectro político. El EAJ-PNV ha mantenido una presencia constante en el Gobierno Vasco, gestionando la comunidad con una agenda centrada en el autogobierno y el desarrollo económico regional (EAJ-PNV, s. f.).

Navarra también se aparta de la norma general, con el Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) desempeñando un papel central en la política de la comunidad. Aunque el PSN-PSOE es la federación navarra del PSOE, la política navarra tiene particularidades propias, dada la singularidad histórica y foral de la región, que influyen en su escenario político y en las coaliciones de gobierno que se forman.

Estas excepciones reflejan la pluralidad del sistema político español y la capacidad de los partidos regionales para influir y liderar en sus respectivas comunidades. Lo cual tiene un impacto significativo en los presupuestos y en la asignación de recursos para los gastos sociales.

Por ejemplo, en comunidades donde partidos con una fuerte orientación hacia políticas sociales y de bienestar, como Esquerra Republicana de Catalunya en Cataluña, lideran el gobierno, es probable observar un aumento en la inversión en servicios públicos como la educación, la salud y la protección social. Estos partidos tienden a priorizar la redistribución de la riqueza y la mejora de los servicios públicos, lo que se refleja en sus presupuestos (Martín, 2010).

En contraste, regiones gobernadas por partidos con una orientación más conservadora o liberal, como el Partido Popular, pueden enfocarse más en la eficiencia del gasto público y en la promoción de la inversión privada, lo que podría traducirse en un enfoque diferente en la asignación de recursos para el gasto social. Esto se manifiesta en presupuestos que pueden priorizar la infraestructura o el apoyo a empresas frente a incrementos directos en el gasto social.

Además, la capacidad de los partidos regionales para formar coaliciones y alianzas también afecta la política de gastos sociales. En comunidades como el País Vasco y Navarra, donde los partidos nacionalistas tienen una influencia significativa, las políticas de gasto social pueden estar también dirigidas a fortalecer aspectos culturales y lingüísticos específicos de la región, además de responder a las necesidades sociales básicas.

En resumen, la pluralidad política en las Comunidades Autónomas de España conduce a un panorama diverso en términos de políticas de gasto social. Esto subraya la importancia de analizar detalladamente los presupuestos regionales para entender cómo las prioridades políticas influyen en la distribución de los recursos destinados al bienestar de los ciudadanos en cada comunidad autónoma.

Sanidad

La sanidad, como componente esencial de las políticas sociales, desempeña un papel crucial en el bienestar de la población y en el desarrollo económico de las Comunidades Autónomas. La inversión en salud no solo busca mejorar los indicadores sanitarios, como la esperanza de vida o la reducción de la mortalidad infantil, sino que también tiene un impacto directo en la productividad y el crecimiento económico. El gasto en sanidad puede ser considerado una inversión en capital humano, que a su vez es una fuente crucial de crecimiento económico.

A continuación, la tabla 2 resume el gasto en sanidad en 2022 de las Comunidades Autónomas seleccionadas para el estudio, incluyendo el gasto total en sanidad, el

porcentaje que este supone sobre el total del gasto, el gasto per cápita y el partido político que gobierna en cada comunidad.

Tabla 2

Gasto en sanidad de las CC. AA. 2022

Comunidad Autónoma	Gasto (miles de €)	% Del gasto total	Gasto per cápita (€)	Partido
Andalucía	12.350.248	34,23%	1.440	PP
Castilla y León	4.316.968	38,42%	1.813	PP
Cataluña	10.676.303	23,95%	1.352	ERC
Comunidad de Madrid	8.764.633	33,71%	1.280	PP
Navarra	1.256.541	23,83%	1.870	PSN-PSOE
País Vasco	4.396.299	33,46%	1.981	EAJ-PNV
Comunidad Valenciana	7.758.403	27,25%	1.487	PSOE

Fuente: Ministerio de Hacienda (2023)

En esta tabla podemos observar que las Comunidades Autónomas con un mayor gasto per cápita en sanidad son Navarra, País Vasco y Castilla y León. En el caso de esta última, también se trata de la comunidad que destina un mayor porcentaje a esta partida. Esto se debe a diversos factores como el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica o las prioridades políticas. Castilla y León posee una de las poblaciones más envejecidas de España, con un 26,5% de personas mayores de 65 años, según datos del INE. Este factor incrementa la demanda de servicios sanitarios, especialmente aquellos relacionados con la atención a la dependencia y enfermedades crónicas. Además, la comunidad autónoma se caracteriza por su amplia extensión territorial y su baja densidad de población, con una dispersión importante de núcleos urbanos. Esta situación dificulta la accesibilidad a los servicios sanitarios y aumenta los costes asociados al transporte y la logística sanitaria. Es importante destacar que, si bien Castilla y León destina un mayor porcentaje de su presupuesto a sanidad, esto no necesariamente se traduce en mejores resultados sanitarios. Diversos indicadores, como la esperanza de vida o la tasa de mortalidad infantil, muestran que se encuentra por debajo de la media nacional en algunos aspectos.

En cambio, Navarra, pese a tener uno de los mayores gastos per cápita en sanidad, es una de las comunidades que destina menos gasto a la sanidad. Esto se debe a su mayor densidad de población y a que esta es una de las comunidades con un mayor presupuesto per cápita, como pudimos ver en la tabla 1, por lo que necesita destinar una menor proporción de su presupuesto para satisfacer las necesidades sanitarias.

El País Vasco presenta una de las tasas de envejecimiento más altas del país, al igual que Castilla y León. Además, registra una incidencia superior a la media nacional de

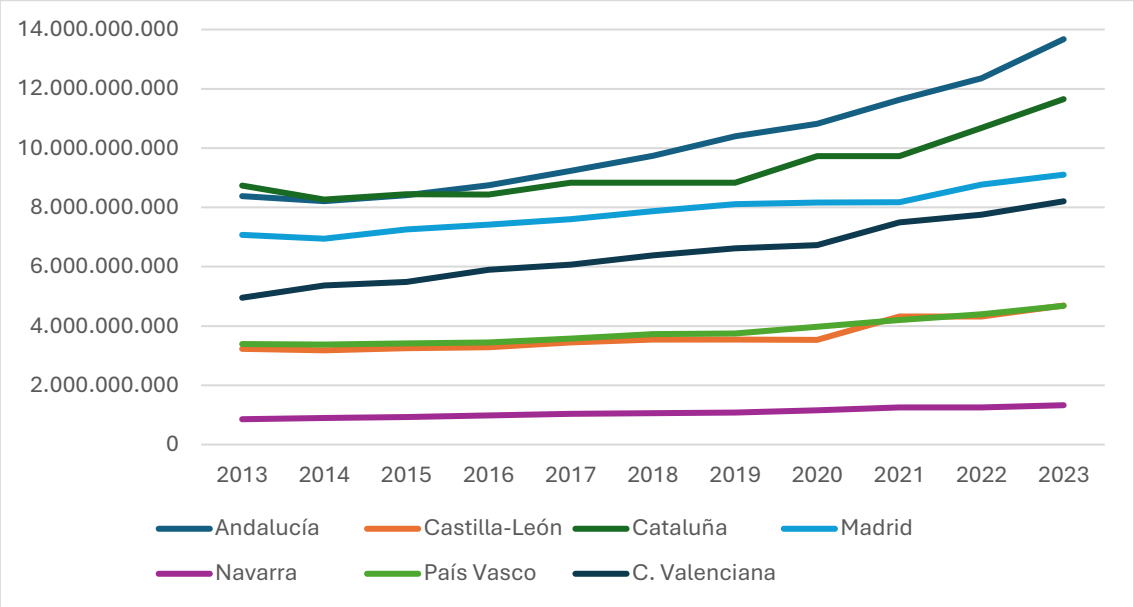
enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Estas patologías complejas y costosas de tratar suponen una presión significativa para el sistema sanitario (Ministerio de Sanidad, 2023). Por ello, se trata de una de las comunidades con mayor inversión relativa y gasto per cápita en sanidad. Consecuentemente, goza de un sistema sanitario reconocido por su eficiencia y calidad. Existe un fuerte arraigo social en torno a la importancia de la salud en la comunidad vasca. Esta sensibilidad se refleja en la voluntad política de invertir en el sistema sanitario y en la alta demanda de servicios por parte de la población. Si bien este gasto supone un reto para la sostenibilidad del sistema, también refleja el compromiso con la salud y el bienestar de la población vasca, valores fundamentales en la identidad de la región (Fernández & Galarza, 2022).

Por otra parte, como resulta evidente, las comunidades con un mayor número de habitantes, como Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, presentan menores gastos en términos relativos y per cápita. Destacando especialmente el caso de Cataluña por sus bajos valores. En este caso hay que tener en cuenta el modelo sanitario catalán. Cataluña ha sido pionera en la implementación de un modelo sanitario que combina la colaboración público-privada y la externalización de servicios. Este modelo se caracteriza por la separación estratégica y operativa de los mecanismos de financiación, compra y provisión de servicios sanitarios. Según relata Amando Martin Zurro (2023), a pesar del reducido gasto, el modelo parece eficiente "si lo evaluamos a partir de la evolución más o menos positiva de diferentes indicadores que miden la calidad de determinadas actuaciones sanitarias relevantes como, por ejemplo, las tasas de partos por cesárea, de reingresos o de infecciones hospitalarias, de reacciones medicamentosas graves o de amputaciones de miembro inferior en enfermos diabéticos. En todos estos ámbitos las cifras de Cataluña son muy similares a la media estatal."

Como podemos ver en el siguiente gráfico, durante el periodo 2013-2023 el gasto en sanidad de todas estas comunidades ascendió progresivamente.

Figura 1

Evolución del gasto en sanidad en euros de 2013 a 2023

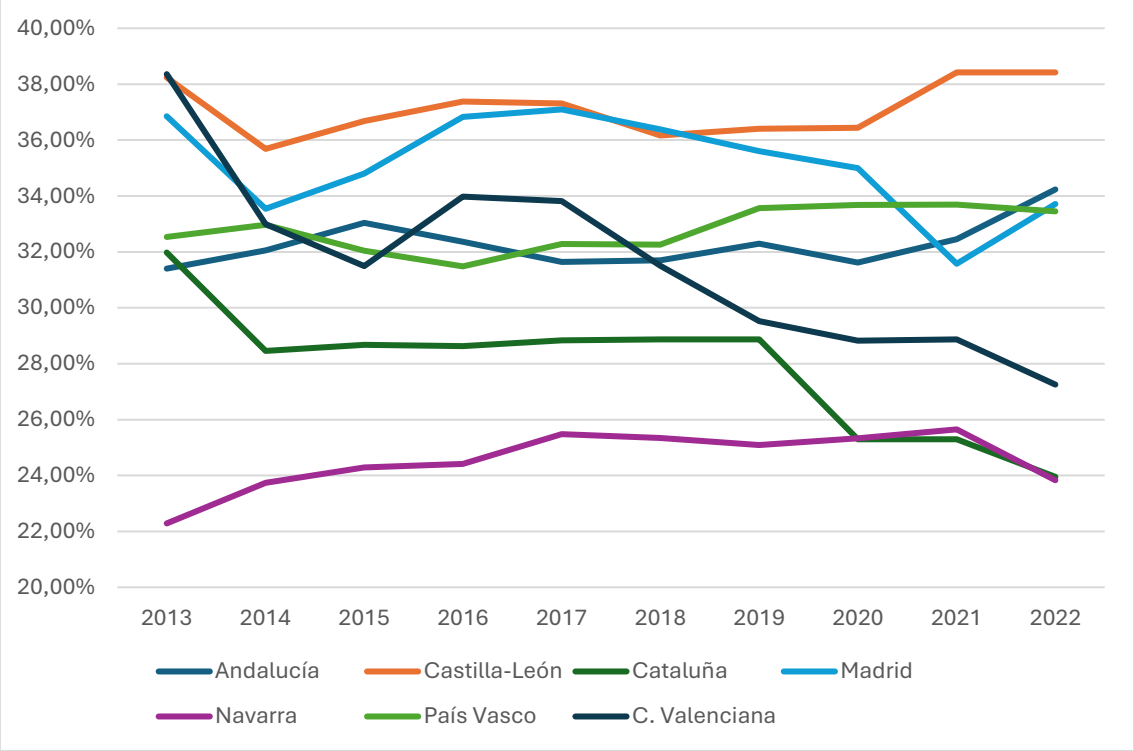


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, para analizar qué comunidades le han dado mayor o menor importancia en términos relativos, utilizaremos el porcentaje del presupuesto total destinado a sanidad. A continuación, se presenta un gráfico que muestra la evolución de la proporción de gasto en sanidad sobre el total de gasto presupuestario en las Comunidades Autónomas seleccionadas para el estudio para evaluar los cambios producidos en los últimos años.

Figura 2

Evolución de la proporción de gasto en sanidad sobre el total de gasto de 2013 a 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

A partir de esta figura podemos ver como existen comunidades que han mantenido cierta estabilidad en la proporción del gasto que destinan a sanidad, como Andalucía, Navarra y País Vasco, mientras que el resto han sufrido altibajos. La mayoría de las comunidades venían reduciendo el porcentaje de fondos destinados a sanidad hasta el año 2014 o 2015. Esto se debe, principalmente, a la crisis económica de 2008 la cual provocó una reducción de los ingresos de las Comunidades Autónomas que obligó a recortar gastos en todas las áreas, incluida la sanidad. Además, el gobierno central, en un esfuerzo por reducir el déficit público, impuso una serie de medidas de austeridad a las Comunidades Autónomas, que incluían la reducción del gasto sanitario (Ministerio de Sanidad, 2018). Las Comunidades Autónomas redujeron el gasto sanitario en un 12% desde 2009, con un esfuerzo de consolidación fiscal significativo en el bienio 2012-2013. Se aplicaron medidas como la reducción de salarios y personal en hospitales, así como recortes en farmacia ambulatoria e inversiones. Muchas de las medidas se caracterizan más como recortes temporales que como ajustes estructurales.

A partir del 2015, la importancia presupuestaria del ámbito sanitario en la mayoría de las Comunidades Autónomas comenzó a aumentar de nuevo, debido a la recuperación económica, la relajación de las medidas de austeridad por parte del gobierno central y el aumento de la financiación destinada a la sanidad. Sin embargo, en comunidades como Madrid, la Comunidad Valenciana o Cataluña, esta tendencia no duraría mucho, ya que vemos cómo, poco tiempo después, volvería a disminuir continuamente.

Basándonos en la información de ambas figuras, podemos utilizar los casos de Andalucía y Cataluña para comparar si una mayor inversión en salud pública se traduce en un impacto económico positivo. En el periodo de estudio Andalucía aumentó su gasto total en sanidad un 63%, mientras que Cataluña lo incrementó en un 33%. Además, Andalucía ha incrementado ligeramente el porcentaje del presupuesto que destina a esta área, mientras que Cataluña lo ha reducido considerablemente.

En la siguiente tabla se representa la tasa de distintos profesionales sanitarios por cada 100 000 habitantes en ambas comunidades al principio y al final del periodo de estudio. Además, podemos ver el porcentaje de variación que se ha producido.

Tabla 3

Tasa de profesionales sanitarios no jubilados por 100 000 habitantes por Comunidades Autónomas

	2013	**2022**	**Variación**
Médicos por 100,000 habitantes			
Andalucía	352,1	432,25	22,77%
Cataluña	473,9	494,82	4,41%
Castilla y León	507,2	539	6,27%
Comunidad de Madrid	485,6	517,1	6,48%
Comunidad Valenciana	365,1	393	7,65%
Navarra	587,5	634,8	8,05%
País Vasco	497,9	529,3	6,31%
Enfermeros por 100,000 habitantes			
Andalucía	338,8	471,39	39,14%
Cataluña	577,5	653,1	13,10%
Castilla y León	603,7	679,4	12,55%
Comunidad de Madrid	502,9	579,2	15,16%
Comunidad Valenciana	473,8	544,5	14,92%
Navarra	633,1	689,3	8,88%
País Vasco	524,4	594,6	13,38%
Psicólogos por 100,000 habitantes			
Andalucía	8,73	62,26	613,17%
Cataluña	34,05	54,46	59,94%
Castilla y León	10,8	57,9	436,11%
Comunidad de Madrid	25,3	83,7	231,62%
Comunidad Valenciana	15,6	63,4	306,41%
Navarra	20,4	66,5	225,00%
País Vasco	17,5	69,9	299,43%

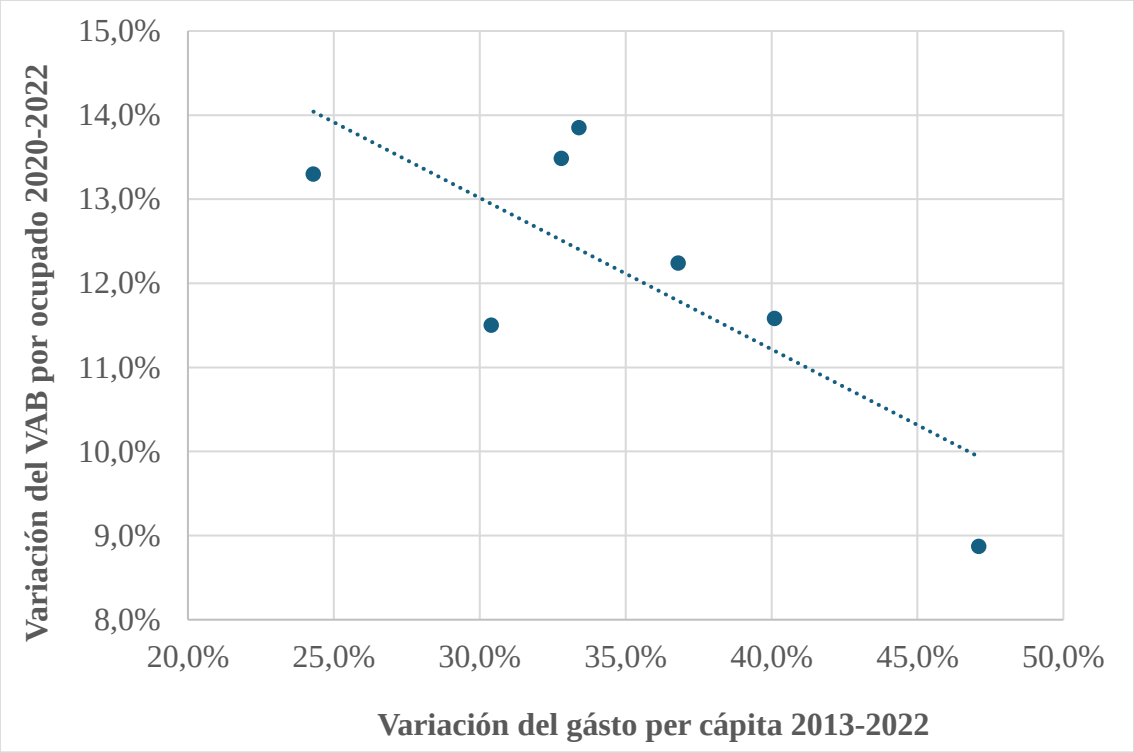
Fuente: INE, 2023.

La tabla refleja que la inversión en sanidad de Andalucía ha propiciado un incremento notable de profesionales sanitarios en comparación con Cataluña. Es particularmente destacable el aumento de psicólogos, lo cual es de especial relevancia ahora que la salud mental está adquiriendo más importancia. Este refuerzo en el número de profesionales por habitante sugiere que los andaluces podrían beneficiarse de una atención sanitaria de mayor calidad, lo que a su vez podría influir positivamente en otros aspectos socioeconómicos. Uno de estos aspectos es el absentismo laboral, definido como la ausencia de una persona de su puesto de trabajo durante horas que corresponden a un día laborable. De acuerdo con el informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales (Adecco Group Institute, 2023), Cataluña registró al cierre del 2023 una tasa de absentismo laboral del 7,4%, lo que representa un aumento interanual del 0,7% y se sitúa dos décimas por encima de la media nacional de España, que es del 7,2%. En contraste, Andalucía reportó la menor tasa de absentismo laboral en España, con un 6,61%. Este dato no solo refleja una gestión eficiente en el ámbito laboral, sino que también podría estar relacionado con la mejor cobertura y calidad de los servicios de salud mental proporcionados a sus habitantes.

Para comprobar si una mayor inversión en sanidad tiene efectos económicos, en la siguiente figura se compara el porcentaje de aumento del gasto per cápita en el periodo de estudio, con el aumento de la productividad laboral de cada comunidad durante los tres últimos años. Para medir la productividad se utiliza el valor añadido bruto (VAB) por ocupado.

Figura 3

Relación entre la variación del gasto per cápita 2013 – 2022 y la variación del VAB por ocupado 2020 – 2022 en las CC. AA. seleccionadas.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

Gracias a esta figura observamos una asociación negativa entre el aumento del gasto per cápita y la productividad laboral en los últimos años del periodo de estudio. Por lo que, en principio, un mayor gasto en sanidad puede mejorar la salud y atención a los ciudadanos, pero no tiene un impacto económico positivo en términos de productividad.

A partir de estos resultados se puede plantar otro argumento que, aunque controvertido y difícil de probar empíricamente, sugiere que un aumento en el gasto sanitario podría tener efectos contraproducentes sobre la productividad laboral. La hipótesis plantea que una mayor inversión en sanidad podría mejorar la capacidad del sistema para detectar enfermedades y condiciones de salud en la población. Sin embargo, esta mayor detección también podría resultar en un incremento del tiempo que los ciudadanos pasan de baja médica, lo cual afectaría negativamente su capacidad productiva.

Desde una perspectiva económica, la salud de los trabajadores es un factor crucial para mantener y aumentar la productividad. Un sistema de salud eficaz debería, en teoría, reducir el ausentismo laboral a largo plazo al tratar y prevenir enfermedades de manera temprana y eficaz. No obstante, si un mayor gasto en sanidad se traduce principalmente en diagnósticos más frecuentes y periodos de baja más prolongados, la productividad podría verse afectada negativamente en el corto plazo. Esto podría ocurrir si, por ejemplo, los protocolos médicos más rigurosos y los mayores recursos disponibles permiten identificar un mayor número de enfermedades que requieren tiempo de recuperación.

Este enfoque también lleva a considerar la complejidad de la relación entre salud y productividad. La salud de un trabajador no es solo un factor de su productividad inmediata, sino que también influye en su rendimiento a largo plazo, su capacidad para innovar y su bienestar general. Por tanto, una mayor inversión en sanidad podría tener beneficios no evidentes a corto plazo, como una fuerza laboral más saludable y satisfecha, capaz de mantener niveles más altos de productividad a largo plazo.

Además, es importante considerar el impacto psicológico de un sistema de salud más eficiente. La seguridad que brinda un sistema sanitario robusto puede reducir el estrés y la ansiedad entre los trabajadores, lo cual también puede tener un efecto positivo en su rendimiento laboral.

En conclusión, aunque el argumento de que un mayor gasto en sanidad podría reducir la productividad debido a un aumento en las bajas médicas tiene cierto fundamento, también es importante considerar los beneficios a largo plazo y los aspectos más amplios de la relación entre salud y productividad. La evaluación de este fenómeno requiere un análisis detallado y equilibrado que tome en cuenta tanto los efectos inmediatos como los beneficios futuros de una población más saludable.

Educación

Este apartado se centrará en examinar cómo el gasto en educación por parte de las Comunidades Autónomas influye en variables económicas clave, tales como el empleo, la productividad y el crecimiento económico. Además, se explorarán las disparidades y similitudes entre las diferentes regiones, proporcionando una visión comprensiva de las dinámicas subyacentes en la relación entre inversión educativa y desarrollo económico en España.

Se debe tener en cuenta que el gasto público destinado a la educación en España es inferior al de países de nuestro entorno (Ayala *et al.*, 2020) y que los recortes en este sector en el periodo 2009-2014 fueron considerables (Pérez *et al*., 2019).

La evidencia empírica sugiere la existencia de una débil correlación directa entre el aumento de la financiación y la mejora de la calidad del aprendizaje de los alumnos (Banco Mundial, 2018; Banco Mundial 2021; Comisión Europea, 2020; OCDE, 2016; OCDE, 2022). Por lo que, a priori, una mejor formación se debería ver reflejada positivamente en la economía a largo plazo.

La educación aumenta el capital humano del mercado laboral de una economía. De esta manera, su población puede explotar nuevo conocimiento tiende a crecer más rápido (Lucas, 1988). Asimismo, la educación mejora la capacidad de innovación de la economía y ejerce un efecto facilitador de transmisión de conocimiento. En este sentido, existen múltiples estudios que analizan la relación entre educación y crecimiento económico, la cual puede ser bidireccional: ¿es la educación un factor determinante del crecimiento económico o en este caso las regiones con mayor crecimiento económico las que muestran un mayor desempeño educativo? Con el fin de centrar la atención en una de las dos direcciones, esta parte del trabajo contempla el efecto de la educación sobre el crecimiento económico.

Históricamente, las Comunidades Autónomas españolas han mostrado diferencias significativas en educación, tanto en calidad como en acceso y resultados académicos. Estas disparidades pueden atribuirse a diversos factores, como las variaciones en la financiación, las políticas educativas específicas de cada región, y las características socioeconómicas locales. Por ejemplo, comunidades como el País Vasco y Navarra, que tienen mayores niveles de autonomía fiscal y recursos financieros, han logrado establecer sistemas educativos con mejores infraestructuras y programas más innovadores. En contraste, otras regiones como Andalucía y Extremadura han enfrentado desafíos mayores debido a limitaciones presupuestarias y contextos socioeconómicos más adversos, lo que se refleja en indicadores educativos más bajos.

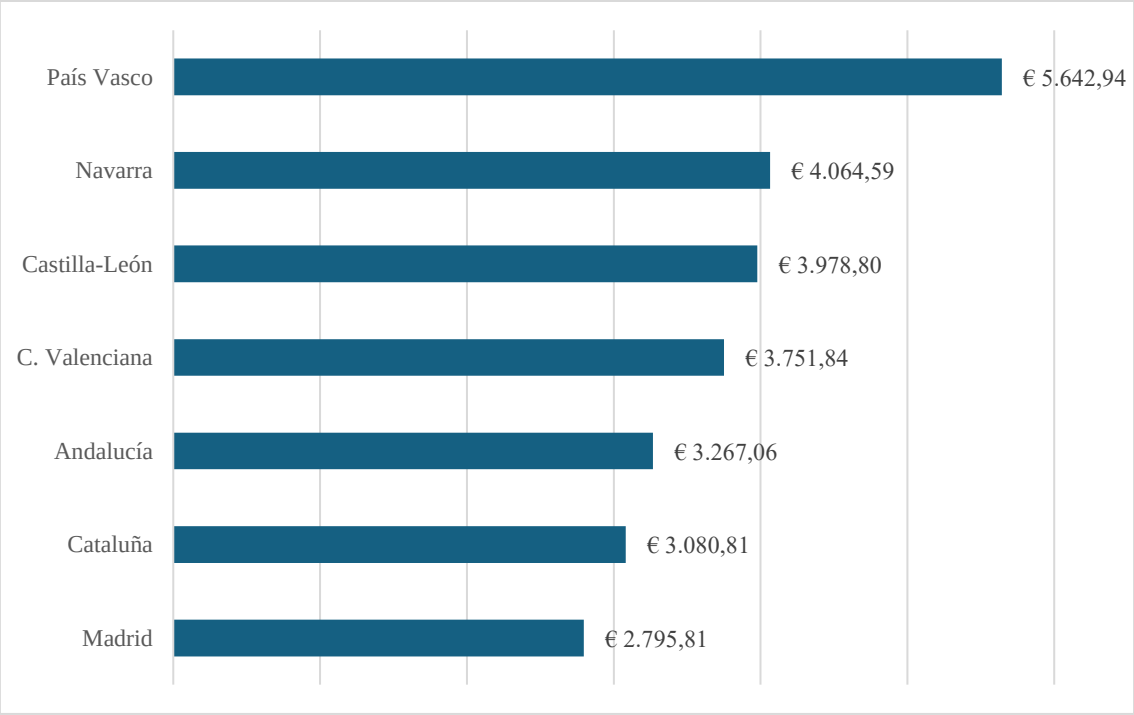
Estas diferencias no solo afectan el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también tienen implicaciones a largo plazo para el desarrollo económico y social de cada comunidad (Calero y Escardíbul, 2007).

La figura 4 presenta el valor promedio, para el periodo 2013-2023, del gasto público en educación de las distintas autonomías españolas, en términos per cápita para la población infantil y juvenil. La distribución territorial es bastante desigual, pues el promedio del gasto educativo por habitante menor de 25 años más elevado, que corresponde a País Vasco (5 642 €), casi duplica al de las dos autonomías con menor promedio del periodo, Madrid (2 795 €) y Cataluña (3 080 €).

En este sentido, diversos estudios recientes han insistido en la necesidad de reducir estas desigualdades regionales, tanto en financiación pública y política educativa como en términos de resultados (Romero-Sánchez et al., 2020; Salinas & Choi, 2020).

Figura 4

Promedio de gasto público en educación 2013-2023 (euros por habitante menor de 25 años)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

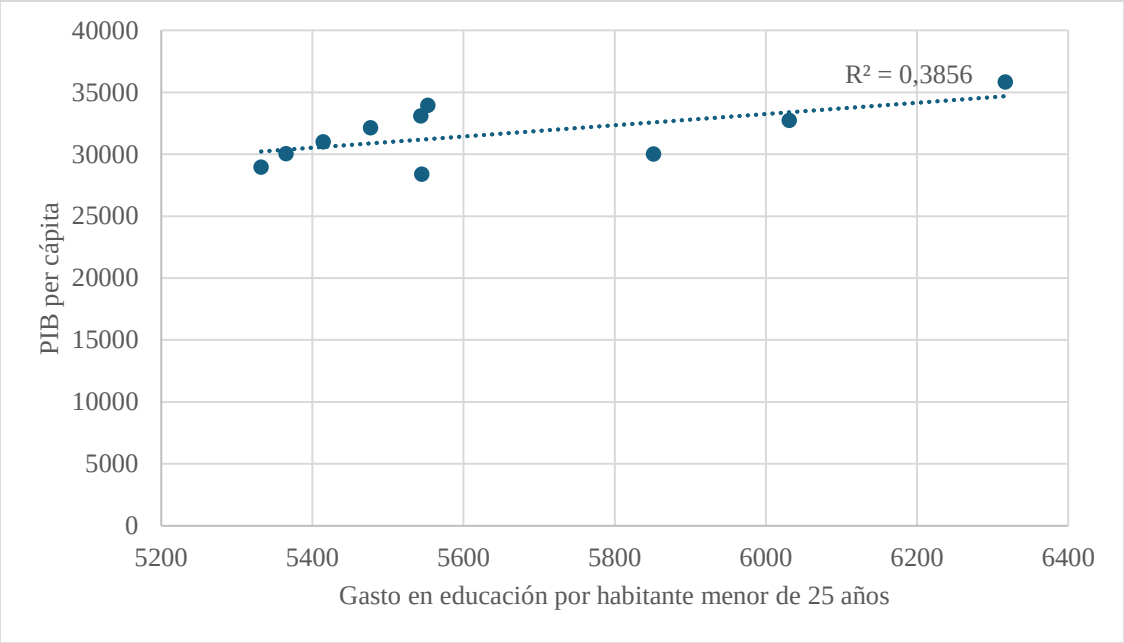
Al existir tal diferencia entre regiones, vamos a tomar a Andalucía y País Vasco como representantes de comunidades en distintas situaciones, basándonos en las diferencias que hemos comprobado anteriormente. De esta manera se trata de comprobar cómo afecta el gasto en educación a la economía, dependiendo de la situación de esta. Esta decisión también se debe al reciente artículo de Laura Márquez Ramos y Estefanía Mourelle, quedestaca la importancia de la educación en el crecimiento económico de España (Márquez Ramos & Mourelle, 2023). Su trabajo trata de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿la dinámica de la actividad económica de un país difiere en función del desempeño educativo de su población? En términos técnicos, la respuesta a esta pregunta supone trasladarnos del habitual contexto lineal en que se ha desarrollado la literatura a uno no lineal. En un contexto de no linealidad, el comportamiento de la relación entre crecimiento económico y educación no sería el mismo para todos los valores de educación.

Por tanto, con el fin de comparar el efecto económico del gasto en educación, las figuras 5 y 6 representan la relación entre el gasto en educación de cada CC. AA. con el PIB per cápita.

Como podemos comprobar en estas figuras, en ambos casos hay una relación positiva. Sin embargo, en el caso de Andalucía la relación es mucho más fuerte. Un R^2 de 0.7312 indica que aproximadamente el 73.12% de la variación en el PIB per cápita puede explicarse por el gasto en educación en Andalucía. Esto sugiere una relación mucho más fuerte entre el gasto en educación y el PIB per cápita en comparación con el País Vasco.

Figura 5

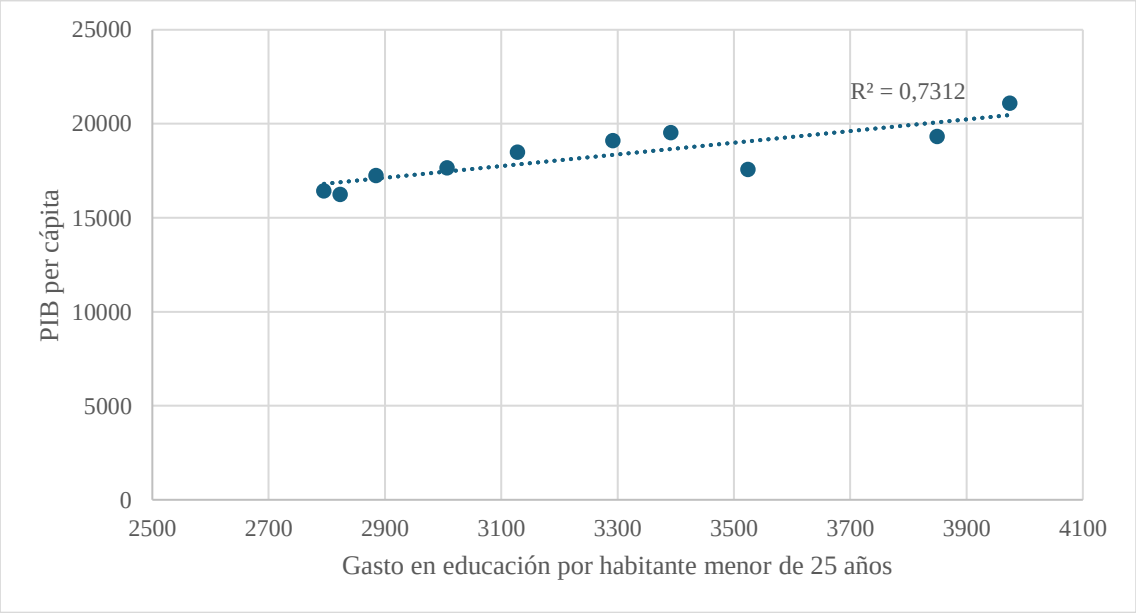
Relación entre el gasto público en educación en País Vasco (euros por habitante menor de 25 años) y el PIB per cápita 2013-2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

Figura 6

Relación entre el gasto público en educación en Andalucía (euros por habitante menor de 25 años) y el PIB per cápita 2013-2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

En el caso del País Vasco, aunque hay una relación positiva, otros factores además del gasto en educación pueden estar influyendo en el PIB per cápita, ya que esta región destaca históricamente en el ámbito de la educación. Por tanto, aumentar el gasto no tiene

un impacto tan significativo sobre el PIB per cápita como lo tendría en otras regiones menos destacadas en educación, como el caso de Andalucía.

En conclusión, en Andalucía, aumentar el gasto en educación podría ser una estrategia efectiva para mejorar el PIB per cápita. En contraste, en el País Vasco, puede ser necesario combinar el gasto en educación con otras políticas económicas para lograr un impacto similar.

Un mejor conocimiento de cómo el crecimiento económico de un país o de una región reacciona ante cambios en el desempeño educativo, así como también reconocer que el crecimiento económico puede mostrar un comportamiento diferente dependiendo del nivel educativo existente en dicho país o región, constituye una información particularmente útil para los encargados de elaborar las políticas públicas.

Protección social

La protección social juega un papel crucial en el bienestar de los ciudadanos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Los mecanismos de protección social, como el seguro social, la asistencia social y los programas de inserción laboral y económica, no solo ayudan a los individuos a encontrar empleos de mayor calidad, sino que también fomentan la productividad individual y familiar. Estos sistemas permiten a las familias invertir en la salud y educación de sus hijos, garantizan la seguridad alimentaria y proporcionan protección a la población anciana, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social (World Bank, 2024).

Los presupuestos de las CC. AA. reflejan el compromiso con la protección y promoción social, incluyendo partidas para pensiones, otras prestaciones económicas, servicios sociales, fomento del empleo, desempleo, acceso a la vivienda y gestión de la Seguridad Social. Estos gastos son esenciales para el desarrollo del capital humano, reconocido como un motor clave para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza (Romer, 1986; Lucas, 1988).

El creciente enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) subraya la importancia de avanzar en la protección social. Por ejemplo, el ODS 1: Fin de la Pobreza, destaca la necesidad de sistemas de protección social bien diseñados para erradicar la pobreza. A través de políticas como las pensiones, la asistencia social y los programas de inserción laboral, se garantiza que las personas tengan acceso a recursos y servicios básicos, reduciendo significativamente la pobreza y la vulnerabilidad de las poblaciones desfavorecidas.

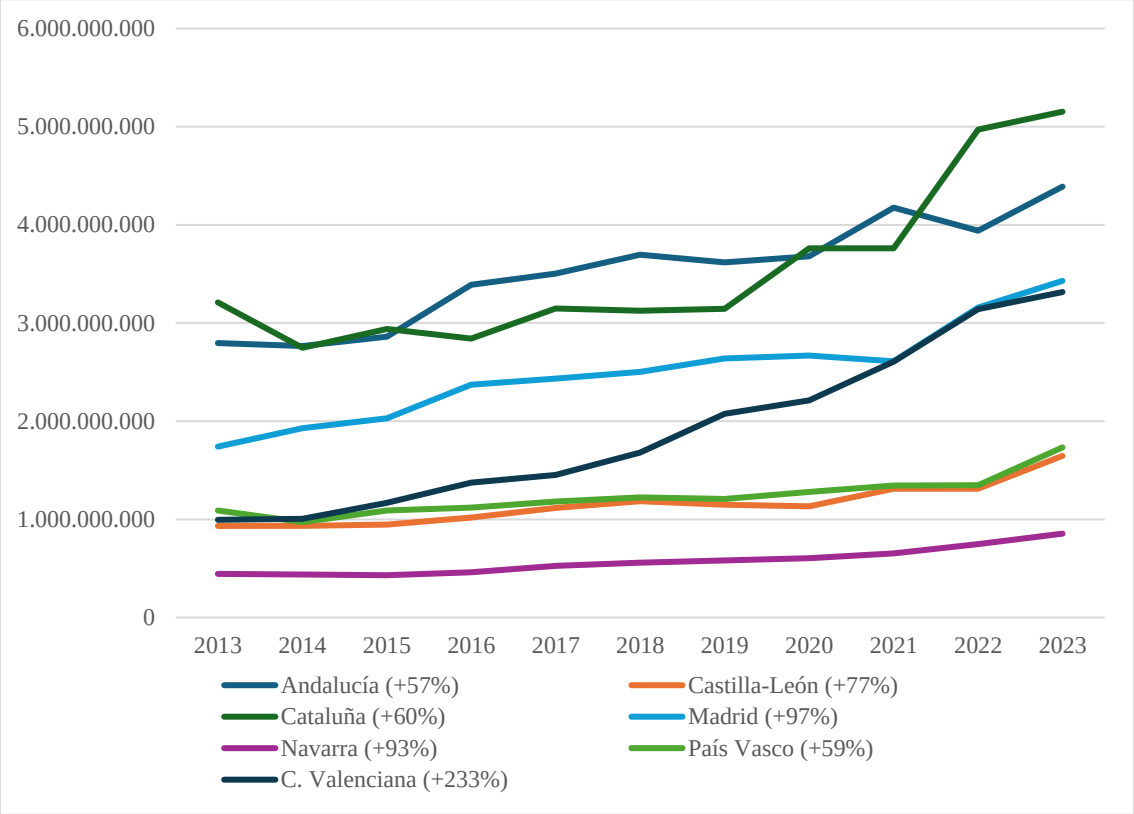
La protección social también influye en el ODS 3: Salud y Bienestar, proporcionando acceso universal a servicios de salud de calidad, seguros médicos y programas de bienestar que mejoran los resultados de salud pública. Además, el ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico está estrechamente vinculado con estos sistemas, que fomentan el empleo de calidad y mejoran la productividad. Finalmente, el ODS 10: Reducción de las Desigualdades, resalta cómo los programas de protección social ayudan a reducir la desigualdad, asegurando oportunidades equitativas para todos.

La evolución del gasto en protección y promoción social en las diferentes CC. AA. muestra un compromiso creciente con el bienestar social, aunque con variaciones regionales que reflejan diferentes prioridades políticas y condiciones socioeconómicas

locales. Para comparar entre las diferentes CC. AA. en la siguiente figura podemos ver la evolución del gasto en esta área durante el periodo de estudio.

Figura 7

Evolución del gasto en actuaciones de protección y promoción social 2013-2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda. Incluida la variación porcentual durante este periodo.

En esta figura destaca el caso de la Comunidad Valenciana, que muestra el incremento más significativo con un 233% de aumento en el gasto. Esto se debe a que, a partir de junio de 2015, la presidencia autonómica de la comunidad pasó del PP al PSOE, con Ximo Puig como presidente, quien mantuvo este cargo hasta julio de 2023. Mientras que, en comunidades como Andalucía, Cataluña o el País Vasco, este incremento ha sido más moderado.

Este dato por sí solo puede resultar algo general. Por lo tanto, para profundizar en el tema y poder realizar comparaciones, en la siguiente tabla aparecen los datos más recientes sobre el porcentaje que cada Comunidad destina a la protección social con respecto al gasto total de ese año, además del gasto per cápita y el partido gobernante actual.

Como podemos observar en la tabla 4, la Comunidad Valenciana sigue siendo una de las comunidades con menor gasto per cápita, a pesar de que ha sido la que más ha aumentado su gasto total en este periodo.

Tabla 4

Gasto en de protección y promoción social de las CC. AA. 2022

Comunidad Autónoma	Gasto (miles de €)	% Del gasto total	Gato per cápita (€)	Partido
Andalucía	3.942.123	10,93%	460	PP
Castilla y León	1.311.417	11,67%	551	PP
Cataluña	4.971.258	11,15%	630	ERC
Comunidad de Madrid	3.157.500	12,14%	461	PP
Navarra	748.169	14,19%	1.114	PSN-PSOE
País Vasco	1.346.128	10,24%	607	EAJ-PNV
Comunidad Valenciana	3.141.494	11,04%	602	PSOE

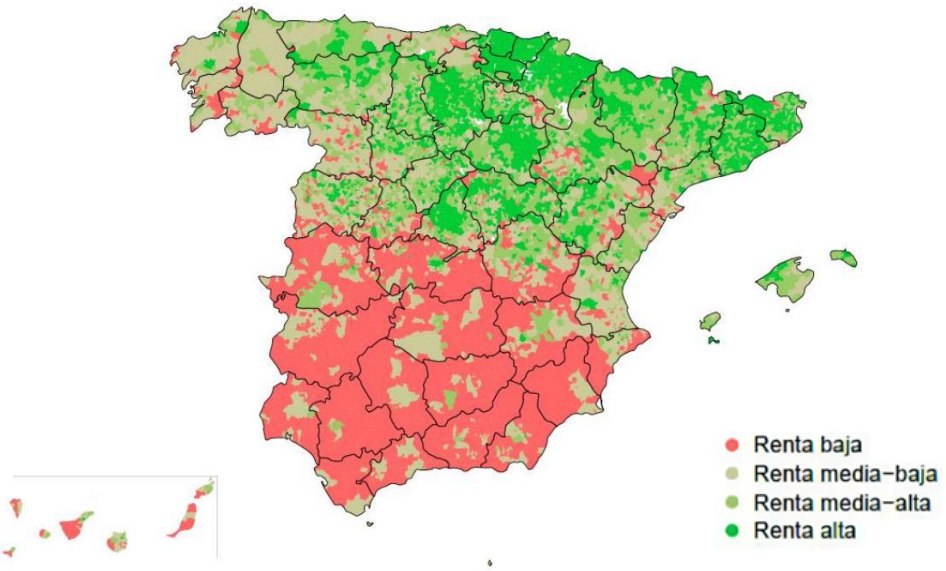
Fuente: Ministerio de Hacienda (2023).

También podemos comprobar que la ideología y las políticas de los partidos gobernantes claramente influyen en cómo se asignan los recursos para protección y promoción social. Los partidos de izquierda, como el PSOE y ERC, tienden a invertir más por habitante en comparación con los partidos de derecha como el PP, lo que puede estar alineado con sus respectivas filosofías políticas de apoyo a los servicios públicos y el bienestar social.

Además de estas diferencias políticas, como se mencionó anteriormente, en España hay grandes diferencias económicas entre regiones. En particular, hay una notable disparidad de renta entre el norte y el sur, como se muestra en la siguiente figura. Estas diferencias económicas regionales subrayan la necesidad de políticas de protección social adaptadas a las condiciones específicas de cada comunidad autónoma, para asegurar una distribución más equitativa de los recursos y fomentar el desarrollo homogéneo en todo el país.

Figura 8

Renta media por habitante por municipios 2021



Fuente: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, (2021).

Debido a estas diferencias, para comprobar el impacto económico del gasto en protección y promoción social, vamos a comparar el índice de Gini, tomando como ejemplo dos comunidades con características diferentes: Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Como podemos ver en la figura, en la primera predomina la renta alta y en la segunda, la renta media-baja. Además, ambas resultan interesantes para el estudio, ya que hemos vito que la Comunidad Valenciana ha sido la que más ha aumentado su gasto en esta política en el periodo de estudio y que, la Comunidad de Madrid es una de las que mayor porcentaje de su presupuesto le destina actualmente (12,14%).

Tabla 5

Índice de Gini por comunidades 2015-2021

	Año						
Comunidad Autónoma	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
Comunidad Valenciana	31,9	32,6	32,7	33,5	34,2	35,4	35,8
Comunidad de Madrid	35,2	35,9	35,8	36,3	36,7	37,4	37,4

Fuente: INE (2022)

La reducción del índice de Gini en la Comunidad Valenciana desde 2015 (35,8) hasta 2021 (31,9) indica una mejora significativa en la distribución de ingresos. Esta disminución del 11% refleja un avance en términos de equidad económica, probablemente impulsado por un aumento del gasto en protección y promoción social.

En contraste, la Comunidad de Madrid muestra una variación menos significativa en su índice de Gini, manteniéndose alrededor de 35-37 a lo largo del mismo período, lo que sugiere una estabilidad en la desigualdad de ingresos. Esta estabilidad puede estar asociada con un enfoque diferente en las políticas sociales y económicas de la región.

Esta reducción de la desigualdad en la Comunidad Valenciana puede tener múltiples efectos positivos a largo plazo (Barr, 2012), como una mejora del bienestar social, que puede llevar a una mayor cohesión social y reducción de la pobreza. También es posible que este fenómeno estimule la economía local, ya que un menor nivel de desigualdad puede resultar en un aumento del consumo interno, debido a que las personas con menores ingresos tienden a gastar una mayor proporción de sus ingresos adicionales en bienes y servicios básicos. Además, como se mencionó en apartados anteriores, la inversión en protección social también puede traducirse en un fortalecimiento del capital humano y, a largo plazo, de la productividad laboral.

La Comunidad de Madrid, a pesar de destinar una parte significativa de su presupuesto a protección social (12,14%), no ha experimentado una reducción similar en su índice de Gini. Esto puede deberse a una combinación de factores, incluyendo diferencias en la estructura económica, el coste de vida más elevado en Madrid, y posiblemente una distribución desigual de los beneficios del crecimiento económico. La estabilidad del índice de Gini en Madrid sugiere que, aunque hay una inversión en protección social, esta no ha sido tan eficaz a la hora de reducir la desigualdad. Esto podría implicar desafíos de inclusión a largo plazo.

En resumen, la comparación entre ambas comunidades resalta la importancia del diseño y la implementación efectiva de políticas sociales. Mientras que la Comunidad Valenciana

ha logrado una reducción significativa en la desigualdad mediante un mayor gasto en protección social, la Comunidad de Madrid podría beneficiarse de un enfoque más específico y adaptado a sus características económicas y sociales para lograr resultados similares.

Bloque 3

Conclusiones

El presente trabajo ha abordado de manera exhaustiva el análisis del impacto económico de las políticas sociales en diversas Comunidades Autónomas (CC. AA.) de España. A continuación, se resumen los principales resultados y conclusiones:

Cumplimiento de las Hipótesis

Sobre la primera hipótesis, relativa a la relación positiva entre la inversión en políticas sociales y el desarrollo económico y social, se ha confirmado que las CC. AA. que destinan una mayor proporción de su presupuesto a políticas sociales tienden a experimentar una reducción en la desigualdad de ingresos y mejoras en el bienestar social. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha mostrado una disminución significativa en su índice de Gini, reflejando una mejor distribución de los ingresos.

En cuanto a los niveles de renta per cápita y gasto en políticas sociales, las comunidades con mayores niveles de renta per cápita no siempre destinan una mayor proporción de su presupuesto a políticas sociales, pero aquellas que lo hacen, como Navarra, muestran resultados positivos en términos de equidad y bienestar social.

Finalmente, sobre la hipótesis que indicaba una tendencia de gobiernos de izquierda a implementar políticas redistributivas, se ha observado que las CC. AA. con gobiernos de orientación política de izquierda tienden a priorizar el gasto en políticas sociales, lo cual se traduce en una reducción más marcada de la desigualdad.

Deducciones sobre los Objetivos Específicos

1. Impacto inmediato y beneficios futuros del gasto en sanidad:

Invertir en sanidad no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también puede reducir costes a largo plazo mediante la prevención de enfermedades y la promoción de una población activa y productiva.

2. Impacto del diseño y ejecución de políticas sociales:

El caso de la Comunidad de Madrid, donde a pesar de un significativo gasto en protección social no se ha observado una reducción proporcional en la desigualdad, destaca la importancia del diseño y la implementación efectiva de las políticas. Esto sugiere que no solo la cantidad, sino la calidad y el enfoque de las políticas son cruciales para lograr los objetivos deseados.

3. Efectos a largo plazo de la inversión en protección social:

En comunidades como la Comunidad Valenciana, la inversión en protección social no solo ha reducido la desigualdad, sino que también ha mejorado el bienestar social y potencialmente ha estimulado el consumo interno y el desarrollo económico a largo plazo.

Conclusión sobre el Objetivo Principal

El análisis realizado confirma que la inversión en políticas sociales, cuando está bien diseñada y ejecutada, puede tener un impacto positivo significativo en la reducción de la desigualdad y en la mejora del bienestar social y económico de las CC. AA.

Las diferencias observadas entre las comunidades resaltan la importancia de adaptar las políticas a las características y necesidades específicas de cada región para maximizar su eficacia.

Limitaciones del Estudio

El estudio cuenta con limitaciones espaciales y temporales, dado que se ha centrado en un conjunto específico de CC. AA., lo que puede limitar la generalización de los resultados a otras regiones de España. Además, el análisis temporal abarca un período de 2013-2023, lo que podría no capturar tendencias a más largo plazo.

También existen limitaciones documentales, ya que la disponibilidad y calidad de los datos presupuestarios y de políticas sociales varía entre las CC. AA., lo que podría haber afectado la precisión del análisis comparativo.

Líneas Futuras de Investigación

En cuanto la extensión del análisis resultaría interesante ampliar el estudio a otras comunidades para obtener una visión más completa del impacto de las políticas sociales en todo el país.

También resultaría interesante evaluar el impacto de políticas sociales específicas (vivienda) para identificar cuáles son más efectivas en reducir la desigualdad y mejorar el bienestar.

Finalmente, realizar estudios a más largo plazo para entender mejor los efectos sostenidos de las inversiones en políticas sociales y su evolución a lo largo del tiempo.

En conclusión, este trabajo reafirma la importancia de las políticas sociales bien diseñadas y ejecutadas para promover la equidad y el bienestar social, ofreciendo valiosas recomendaciones para la formulación de políticas futuras en las CC. AA. de España.

Bloque 4

Referencias bibliográficas

Titmuss, R. M. (1950). *Problems of Social Policy*. London: His Majesty's Stationery Office.

Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.

Laparra, M., & Pérez Eransus, B. (Coords.). (2012). *Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España*. Fundación FOESSA.

Palma, A., Martínez, R., Flores, L., & Collinao, M. P. (2013). El impacto económico de las políticas sociales. En *Documentos de Proyecto*. Recuperado 4 de abril de 2024, de https://repositorio.cepal.org/items/d10ef794-79ba-4e02-86f9-dc0c3523a35f

Herrero Sachez, C., & Carrasco Pérez de Mendiola, R. (2010). El presupuesto de las Comunidades Autónomas en un contexto de descentralización administrativa. *Revista Española de Control Externo*. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3250893.pdf

Burkhead, J. (1966). *El Sistema Presupuestario Gubernamental*. Herrero.

Amado, A. (2024). Hacienda pública – Capítulo 7: Planificación y presupuesto público. Universidad Nacional de La Pampa. Recuperado de https://campus.eco.unlpam.edu.ar/pluginfile.php/80958/mod_resource/content/1/Teor%C3%ADa%20Cap%C3%ADtulo%207%20-%20Planificaci%C3%B3n%20y%20Presupuesto%20P%C3%BAblico.pdf

Benitez, A. (2023). El presupuesto público y las etapas del ciclo presupuestario. Obtenido de Abogado Derecho Administrativo y Contencioso: https://administrativando.es/el-presupuesto-publico-y-las-etapas-del-ciclo-presupuestario/

Estivill, J., Breuer, I., Engels, D., & Vranken, J. (2004). *Políticas sociales europeas: Un análisis de su evolución y efectividad*. Barcelona: Editorial UOC.

Fernández García, T., & de la Fuente Robles, Y. (2009). *Política social y trabajo social*. Alianza.

Ministerio Público Fiscalía de la Nación - MPFN. (2015). Presupuesto Público. https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3750_presupuesto_publico.pdf

Instituto Peruano de Administración Pública y Política de Gobierno - IPAPPG. (2022). La importancia del presupuesto público. https://ipappg.edu.pe/blog/importancia-presupuesto-publico/

Introducción a la lectura de los Presupuestos Generales del Estado. (2022). En https://www.hacienda.gob.es/en-GB/Paginas/Home.aspx (N.o 185-21-074-7).

Recuperado 4 de abril de 2024, de https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE/ProyectoPGE2022/Documents/LIBROSALMON2022.pdf

Tezanos, J. (2008). Exclusión social, democracia y ciudadanía económica. *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, (75)*, 17-30.

Real Instituto Elcano. (2024, 16 enero). España en el mundo en 2024: perspectivas y desafíos. *Real Instituto Elcano*. https://www.realinstitutoelcano.org/policy-paper/espana-en-el-mundo-en-2024-perspectivas-y-desafios/

Observatorio de la Realidad Social. (2019). *Guía de Evaluación de Políticas Sociales*. Recuperado 4 de abril de 2024, de https://www.observatoriorealidadsocial.es/files/guia-evaluacion-politicas-sociales-ors-navarra-2020.pdf

Alemán Bracho, C. (2013). *Políticas sociales* (2a ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas.

Aranibar, V. (2021). Las políticas sociales y sus características conforme a algunos autores. https://www.researchgate.net/publication/350767216_Las_politicas_sociales_y_sus_caracteristicas_Conforme_a_algunos_autores

Morcillo-Martínez, J. M. (2022). Exclusión social, pandemia y políticas sociales en España: un análisis desde el Trabajo Social. *Trabajo social*, *24*(1), 169-191. https://doi.org/10.15446/ts.v24n1.94719

Erviti, M. A. (2021). Presupuesto público [Universidad Nacional de la Pampa]. https://repo.unlpam.edu.ar/bitstream/handle/unlpam/7805/etg-ervpre021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Arrow, K. J., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C. S., Jansson, B., Levin, S. A., Mäler, K., Perrings, C., & Pimentel, D. (1995). Economic growth, carrying capacity, and the environment. *Ecological Economics*, *15*(2), 91-95. https://doi.org/10.1016/0921-8009(95)00059-3

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Economics*. McGraw-Hill Companies.

Morcillo, F. M., & Beker, V. A. (2012). *Economía, principios y aplicaciones*. McGraw-Hill.

Ayuntamiento de Madrid. (s. f.). Demografía y población. https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Estadistica/Areas-de-Informacion-Estadistica/Demografia-y-Poblacion?vgnextchannel=4e77a4f094b74210VgnVCM2000000c205a0aRCRD

Esquerra Republicana de Catalunya. (s. f.). https://www.esquerra.cat/ca

INE - Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). INEbase / Demografía y población. INE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984

Eaj-Pnv. (s. f.). EAJ-PNV - Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco. EAJ PNV. https://www.eaj-pnv.eus/es/

Martín, M. B. (2010). Estado y pluralismo de bienestar: Políticas y tendencias en la agenda social. Consideraciones desde el caso español. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, *40*(112), 143-173. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3420003.pdf

INE - Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). Proporción de personas mayores de cierta edad por comunidad autónoma(1451). INE. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1451

Ministerio de Sanidad. (2023). Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2022. *Informes, Estudios e Investigación*. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2022/INFORME_ANUAL_2022.pdf

Fernández, J. C., & Galarza, M. E. (2022). El reto del sostenimiento del gasto sanitario público en el País Vasco: Envejecimiento y crecimiento económico. *Revista de Estudios Regionales, (125)*, 45-84.

Zurro, A. M. (2023, 19 marzo). Luces y sombras de la sanidad pública catalana: el modelo. *Catalunya Plural*. https://catalunyaplural.cat/es/luces-y-sombras-de-la-sanidad-publica-catalana-el-modelo/

Ministerio de Sanidad. (2018). Crisis económica y salud en España. En *Informes, Estudios E Investigación*. Recuperado 8 de mayo de 2024, de https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/CRISIS_ECONOMICA_Y_SALUD.pdf

Bandrés, E., & González, R. (2016). La reducción del gasto sanitario en España durante la crisis. *Cuadernos de Información Económica, (248)*, 37-47. Recuperado 8 de mayo de 2024, de https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_CIE/248art05.pdf

The Adecco Group Institute. (2023). Informe trimestral: absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales. Diciembre 2023. https://gestionit.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/VII-Informe-trimestral-absentismo-y-siniestralidad-laboral-CEPROSS.pdf

INEbase / Sociedad / Salud / Estadística de profesionales sanitarios colegiados / Resultados. (s/f). INE. Recuperado el 14 de mayo de 2024, de https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176781&menu=resultados&idp=1254735573175

Banco Mundial. (2018). *World Development Report 2018. Learning to realize education's promise*. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018

Banco Mundial. (2021). *EFW: Education finance watch 2021*. World Bank Group. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/226481614027788096/education-finance-watch-2021

Comisión Europea. (2020). *Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance*. Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/517ee2ef-4404-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en

OCDE. (2016). *PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education*. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en

OCDE. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. OECD Publishing. https://read.oecd.org/10.1787/3197152b-en?format=pdf

Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics, 22*(1), 3-42.

Calero, J., & Escardíbul, J. O. (2007). Evaluación de servicios educativos: el caso de la educación primaria y secundaria en España. https://ieb.ub.edu/wp-content/uploads/2018/04/2007-IEB-WorkingPaper-07.pdf

Ayala, L., Martínez, R., Cantó, O., Romaguera, M., & Navarro, C. (2020). Educación. *Informe 05 Necesidades Sociales en España*. Fundación "la Caixa". https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/informes-listado-necesidades-sociales

Romero-Sánchez, E., Alcaraz-García, S., & Hernández-Pedreño, M. (2020). Desigualdades educativas y respuesta institucional. *Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado, 24*(1), 22-48. http://doi.org/10.30827/profesorado.v24i1.8834

Salinas, J., & Choi, A. (2020). Las desigualdades educativas entre Comunidades Autónomas en España. En L. Ayala y J. Ruiz-Huerta Carbonell, J. (dirs.), *4º Informe sobre la Desigualdad en España: una perspectiva territorial* (pp. 195-226). Fundación Alternativas.

Marquez-Ramos, L., & Mourelle, E. (2019). Education and economic growth: an empirical analysis of nonlinearities. *Applied Economic Analysis, 27*(79), 21-45. https://doi.org/10.1108/AEA-06-2019-0005

World Bank. (2024). Protección social: Panorama general. Protección social: Panorama general (bancomundial.org)

Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy, 94*(5), 1002-1037.

Lucas, R. E. Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics, 22*(1), 3-42.

Barr, N. (2012). *Economics of the Welfare State*. Oxford University Press.

INE - Instituto Nacional de Estadística. (2021). *Atlas de distribución de renta de los hogares / Últimos datos*. INE. https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177088&menu=ultiDatos&idp=1254735976608